

Carácter del dato de profesión de sacerdote . Informe 44/2004.

Carácter del dato de la profesión de sacerdote

La consulta plantea el nivel de seguridad que habrá de implantarse sobre el fichero “Registros Oficiales de altos cargos de entidades inscritas en el Banco de España”, teniendo en cuenta que en el mismo es posible que los interesados hagan constar datos relacionados con su profesión, pudiendo ésta ser la de “sacerdote”, “alcalde”, “representante de los trabajadores” o “representante de la Comunidad Autónoma”.

El consultante indica en su consulta que el fichero debería someterse simplemente a las medidas de seguridad de nivel medio, toda vez que el fichero incluye datos referentes a la comisión de infracciones administrativas y la imposición de las correspondientes sanciones, pero no a las medidas de seguridad de nivel alto, dado que la finalidad del fichero “no es el tratamiento de datos de carácter personal que revelen ideología, afiliación social , religión o creencias” y que “el contenido del campo es decidido de forma voluntaria, libre y autónoma por el interesado, sin intervención alguna por parte del Banco de España”.

Sin perjuicio de que posteriormente se analizarán los supuestos de las concretas profesiones mencionadas en la consulta, debe ahora analizarse si la fundamentación de la misma pudiera ser suficiente para que el dato de la profesión pudiera “excluirse de la consideración de especialmente protegido”, tal y como se solicita.

Ciñéndonos a los datos que pudieran relacionarse con los indicados en la consulta, el artículo 7.2 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, dentro del precepto referido a los datos especialmente protegidos, establece que “Sólo con el consentimiento expreso y por escrito del afectado podrán ser objeto de tratamiento los datos de carácter personal que revelen la ideología, afiliación sindical, religión y creencias”.

Quiere ello decir que la Ley ha venido a delimitar los supuestos en que un dato tiene la condición de especialmente protegido de un modo objetivo, de suerte que los datos relacionados con la ideología, afiliación sindical, religión y creencias de los ciudadanos serán en todo caso especialmente protegidos, sin que dicha circunstancia quede vinculada a una actuación del responsable del tratamiento, tal como la determinación de la finalidad que justifica el tratamiento.

Por el contrario, el legislador sí se ha preocupado de garantizar que en ningún caso la finalidad que justifica el tratamiento sea precisamente conocer la ideología, afiliación, religión y creencias de los ciudadanos, cuando el artículo 7.4 de la Ley Orgánica dispone que “Quedan prohibidos los ficheros creados con la finalidad exclusiva de almacenar datos de carácter personal que revelen

la ideología, afiliación sindical, religión, creencias, origen racial o étnico, o vida sexual”.

De este modo, cabe concluir que la finalidad del tratamiento habrá de ser siempre distinta al mero conocimiento de estas circunstancias de la persona, no afectando dicha finalidad en el carácter especialmente protegido que tendrán en todo caso, y de modo absolutamente objetivo, los datos relacionados con la ideología, afiliación sindical, religión y creencias de los afectados.

Por otra parte, se alega, como se anticipó que los datos no deberían tener el carácter de especialmente protegidos, dado que los mismos son introducidos por los propios interesados, decidiéndose el contenido del dato “de forma voluntaria, libre y autónoma” por los mismos.

Del tenor de la consulta pudiera desprenderse que el interesado sería libre para incluir o no el dato referente a su profesión en el Registro, de modo que la omisión de dicho dato no implicaría ninguna vulneración de las normas reguladoras de las competencias del banco de España y de la obligación de comunicación de los datos de los miembros de los órganos de gobierno sometidos a su función supervisora. En ese caso sería suficiente excluir el campo de profesión del mencionado registro, dado que no sería precisa su cumplimentación, siendo el interesado libre para facilitar el dato.

Si, por el contrario, existe una obligación por parte de los miembros de los órganos de gobierno de facilitar el dato referente a su profesión, no puede considerarse que la cumplimentación del campo sea enteramente libre en cuanto a su contenido, dado que el mismo habrá de referirse estrictamente a dicha profesión o, a lo sumo, a la condición en virtud de la cual los afectados son miembros del órgano de gobierno.

De este modo, a título de ejemplo, si el miembro del órgano de gobierno tiene como profesión la de sacerdote, no existiría libertad alguna para indicar otra profesión, dado que es ésta y no otra la que ostenta.

Por otra parte, la condición de especialmente protegido de un dato no se hace en ningún lugar depender del carácter voluntario con que el mismo es facilitado. Por el contrario, la Ley Orgánica 15/1999 exige en el artículo 7.2 que se transcribió anteriormente que el dato sea, en todo caso, facilitado voluntariamente, dado que será preciso que conste el consentimiento expreso y por escrito del afectado para que el dato pueda considerarse lícitamente tratado.

Por todo ello, debe concluirse que las dos circunstancias expresamente mencionadas en la consulta como justificantes de que un dato en principio catalogado como especialmente protegido deje de tener este carácter no sólo no encuentran amparo en la Ley Orgánica 15/1999, sino que precisamente son exigibles en el tratamiento de los datos especialmente protegidos a los que se refiere la consulta en todo caso.

Tampoco sería admisible la hipótesis de que el dato no ha de ser considerado especialmente protegido por el hecho de que el mismo “se ostenta y ejerce de forma pública y notoria.

En este sentido, la Sentencia de la Audiencia Nacional de 28 de septiembre de 2001 reproduce la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional en su Sentencia 292/2000, de 30 de noviembre, en la que se recuerda que la protección de este derecho fundamental a la protección de datos “alcanza a aquellos datos personales públicos, que por el hecho de serlo, de ser accesibles al conocimiento de cualquiera, no escapan al poder de disposición del afectado porque así lo garantiza su derecho a la protección de los datos (...) el que los datos sean de carácter personal no significa que sólo tengan protección los relativos a la vida privada o íntima de la persona, sino que los datos amparados son todos aquellos que identifiquen o permitan la identificación de una persona”.

En consecuencia, sin perjuicio de lo que posteriormente se indicará, en caso de que los datos a los que se refiere la consulta puedan revelar la ideología, afiliación sindical, religión o creencias de los afectados, los mismos tendrán en todo caso la condición de especialmente protegidos, siendo de aplicación a aquéllos las medidas de seguridad de nivel alto previstas en el Real Decreto 994/1999.

En cuanto a los concretos datos a los que se refiere la consulta, es posible que los referentes a la condición del afectado de alcalde, representante de los trabajadores o representante de la Comunidad Autónoma no revelen de modo directo la ideología o afiliación sindical de los afectados, sin bien esta circunstancia podría resultar discutible.

Sin embargo, no cabe ninguna duda que la condición de sacerdote del afectado revela su pertenencia a la Iglesia Católica y en consecuencia sus creencias, tal y como ya ha tenido ocasión de indicar esta Agencia en informe de 15 de diciembre de 2003, en que se señalaba que “el tratamiento de los datos referidos a la profesión de quienes ejerzan el ministerio en una determinada confesión religiosa no resulta contrario a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, siempre que se dé cumplimiento a lo previsto en la misma, y en especial se recabe el consentimiento expreso y escrito de los afectados”, añadiendo al propio tiempo que “será precisa la imposición sobre el fichero que recoja estos datos de las medidas de seguridad de nivel alto escritas por el Real Decreto 994/1999, de 11 de junio”.

Por todo ello, ha de concluirse que será precisa la implantación sobre los ficheros que contengan datos profesionales de los afectados entre los que pueda encontrarse el de sacerdote de las medidas de seguridad de nivel alto.